

LÍNEAS ROJAS ANTE EL POSIBLE FIN DE ETA

Somos muchas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, las que observamos con atención la debilidad de ETA en estos últimos tiempos. A nadie se le escapa que, felizmente para todos, los momentos que atraviesan son de especial dificultad. Lo cual no quiere decir que su final esté obligatoriamente cerca ni que podamos reconocerlo, si llega, en una declaración solemne o en un acto simbólico; sino que pudiera ocurrir que muera por inanición o por extrema debilidad y en un tiempo difícil de medir. Pero esto no es lo más importante, es su problema no el nuestro.

En cualquier caso, está claro que todavía nos puede hacer daño y que lanzar las campanas al vuelo puede resultar ingenuo cuando no contraproducente para los demócratas y motivador para los terroristas.

Estos tiempos son de esperanza fundada pero también de prudencia. Por ello resulta necesario pensar que un posible final, por tan ansiado, no pueda llevarse por delante principios y cuestiones fundamentales para las víctimas y para la sociedad.

Los terroristas cuando asesinaron, hirieron y destruyeron, atentaron contra las víctimas, pero también atentaron contra la libertad, contra nuestra forma de convivencia, contra los principios por los que nos regimos. Si ahora se encuentran en este estado de debilidad no es por una casualidad, sino fruto de la actuación decidida del Estado de Derecho en su lucha antiterrorista, de los acuerdos entre los partidos democráticos, de la colaboración internacional y de la voluntad socialmente mayoritaria en Euskadi y en el resto de España. Es fruto además de las políticas de tolerancia cero con el terrorismo puestas en marcha por los gobiernos central y vasco.

Por todo esto, nos parece que las asociaciones y fundaciones de víctimas tenemos la obligación moral de señalar las líneas rojas que no se deberían traspasar una vez que haya cesado la violencia. Líneas rojas tras las que tienen que quedar protegidas nuestras normas de convivencia democrática. Y estas líneas rojas, a nuestro juicio, deben estar marcadas por los principios y valores del Estado de Derecho y deben ser los poderes públicos quienes garanticen que no sean traspasadas.

La primera línea roja que no se debe vulnerar es la que marca que el fin del terrorismo no puede suponer rédito político alguno, por lo que no cabe contrapartida política para los terroristas.

Sea cual sea el fin, un elemental respeto al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo exigirá que los delitos terroristas sean siempre investigados y juzgados con la misma determinación que hasta ahora.

La integración en el juego político democrático de sectores que hasta el momento no han condenado la violencia, o que incluso han sido sus cómplices políticos, sólo podrá darse cuando de manera nítida y pública rechacen el uso de la violencia como método para conseguir fines políticos y, además, acepten de manera indubitada la legitimidad y los valores del Estado de Derecho.

En cuanto al destino de los terroristas, nuestro ordenamiento jurídico deberá ser aplicado conforme a lo que las leyes prevén, las cuales conjugan la parte retributiva de la pena con el objetivo de la reinserción. Pero en este punto nos parece imprescindible, desde el respeto a la dignidad de las víctimas, que ante estas posibles medidas haya una exigencia de proclamación por parte de los terroristas de la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos, el reconocimiento y la reparación del daño causado y la asunción de la legitimidad del nuestro Estado de Derecho.

En estos momentos, creemos necesaria la prudencia de todos los partidos e instituciones, y dosis de generosidad para no buscar protagonismos ni intereses partidarios. Son momentos difíciles, en los que la cercanía del final no nos puede llevar a cometer errores. Ni por exceso, ni por defecto. Sobre todo será muy importante no caer en la tentación de creer que desaparecida ETA, han desaparecido todas sus consecuencias.

Por último, creemos que será necesario mantener en la memoria los abominables crímenes del terrorismo, para reparar tanto sufrimiento, para no olvidar nunca y para que no se repitan. Tenemos derecho a una memoria colectiva que mantenga siempre vivo el recuerdo de tanta infamia, de tanta tragedia y de tanto sufrimiento causado. Y, así, reiteramos nuestra propuesta a las instituciones vascas para que, complementando las disposiciones de la Ley 4/2008 de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, acuerde crear un espacio público institucional permanente que mantenga viva la memoria y el recuerdo de tantas víctimas y de tanto sufrimiento. Un centro institucional que sea escuela y museo, investigación e historia, acogida y respuesta, memorial permanente y grito contra el horror del terrorismo.

Desde la Fundación queremos manifestar que la victoria sobre ETA será la victoria del Estado de Derecho sobre el totalitarismo, el fanatismo y la exclusión. No va a ser la victoria en exclusiva de ningún partido político, ni de ninguna personalidad, sino la de todos los demócratas, la de toda la sociedad.